

San Miguel, veintitres de marzo de dos mil veintidós

Vistos, oídos y considerando:

PRIMERO: Que **Marta Cecilia Álvarez González**, docente, con domicilio en Av. Antonio Varas 106, depto. 205, Providencia, interpone demanda en contra de **Corporación Educacional Héroes de La Concepción**, del giro de su denominación, representada legalmente por Carlos Eduardo González Julio, ambos domiciliados en Chiloé 5053, San Miguel, con el objeto que se hagan las declaraciones y se condene a la demandada al pago de las prestaciones que indica.

Fundando su pretensión señala que ingresó a prestar servicios para la demandada, el 1 de marzo de 2018, para desempeñarse como docente en el establecimiento educacional Escuela Premilitar Héroes de la Concepción, suscribiendo un contrato de trabajo que estableció su vigencia hasta el 28 de febrero de 2019, posteriormente, suscribió un anexo de contrato con fecha 1 de marzo de 2019, que prorrogó la vigencia del mismo hasta el 28 de febrero de 2020, percibiendo una remuneración de \$904.609.-

Señala que estando de vacaciones, durante el mes de enero de 2020, y dado que no había tenido información sobre su situación laboral, llamó al jefe de la Unidad Técnica Pedagógica del colegio, Luis Alvarado, quien le informó que trabajaría sólo hasta el 28 de febrero de 2020, ya que estaba en una lista de profesores que serían despedidos, agregando que recibiría una carta que formalizaría su separación, lo que nunca ocurrió.

Señala que en la Inspección del Trabajo, obtuvo un comprobante de carta de aviso para terminación del contrato de trabajo, ingresada por la demandada el 31 de diciembre de 2019, al portal web de la Dirección del Trabajo, declarando que su contrato había terminado el día 28 de febrero de 2020, por la causal contenida en el Artículo 159 N°4 del Código del Trabajo.

Añade que la demandada no dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 162 del Código del Trabajo, ya que hasta la fecha no ha recibido carta de despido, por lo que su despido fue ilegal e injustificado y agrega que la demandada le adeuda las cotizaciones previsionales correspondientes al mes de febrero de



2020, las cotizaciones de salud correspondientes a los meses de septiembre de 2019 a febrero de 2020 y las cotizaciones del seguro de cesantía correspondientes a los meses de marzo y abril de 2019, septiembre a diciembre de 2019, enero y febrero de 2020 y en mérito de lo expuesto y normas legales que invoca, solicita se condene a la demandada al pago de las prestaciones que consigna en el petitorio de su libelo pretensor.

SEGUNDO: Que la demandada, contestando el libelo pretensor, solicitó el rechazo de éste en todas sus partes, con costas.

Fundando su defensa, primeramente, opone excepción de caducidad de la acción, en virtud de los fundamentos que constan en su escrito de contestación, los que se dan por reproducidos.

En cuanto al fondo, solicita el rechazo de la demanda en todas sus partes, especialmente respecto de la existencia de un despido, toda vez que lo ocurrido en la especie es un término de contrato a plazo fijo, negando la existencia de una deuda previsional ya que las cotizaciones se encontraban pagadas al tiempo de separación del trabajador, mediando además finiquito suscrito por las partes ante notario público.

Añade que en cuanto a las prestaciones pretendidas por la demandante, nada se reconoce adeudar ya que las cotizaciones han sido pagadas y las demás partidas indemnizatorias, no resultan procedentes toda vez que no se observan los presupuestos necesarios para ello.

TERCERO: Que, celebrada la audiencia preparatoria y fracasado el trámite de conciliación, el Tribunal recibió la causa a prueba fijando los hechos a probar que constan en el acta respectiva la que, en lo pertinente, se da por reproducida en su totalidad, para todos los efectos legales.

CUARTO: Que, en orden a acreditar los fundamentos de su pretensión, la parte demandante ofreció e incorporó en la audiencia de juicio la prueba documental y testimonial singularizadas en el acta respectiva la que, para todos los efectos legales, se da por expresamente reproducida en lo pertinente, como asimismo las declaraciones que constan en el registro de audio.

Que, por su parte, la demandada incorporó la prueba documental, confesional, testimonial y oficios singularizadas en el acta respectiva la que, para



todos los efectos legales, se da por expresamente reproducida en lo pertinente, como asimismo las declaraciones que constan en el registro de audio.

QUINTO: En cuanto a la excepción de caducidad

Que la demandada al contestar el libelo pretensor opuso excepción de caducidad fundada en la caducidad contemplada en el artículo 168 del Código del Trabajo, afirmando que el plazo para deducir la acción se encuentra vencido, señalando que la existencia y aplicación de la Ley 21.226 no puede ser óbice de una deliberada arbitrariedad por parte del trabajador, traducido en accionar en un plazo antojadizo e indica que el artículo 8 de dicho cuerpo legal, no permite en caso alguno al demandante accionar habiendo transcurrido tan excesivamente el plazo establecido por nuestro legislador laboral, pues en contrario se encuentran derechos y principios transversales como la seguridad jurídica, el debido proceso, la igualdad ante la Ley, pero por sobre todo, no resulta menester dar un uso abusivo a una situación fáctica como la sanitaria. Por su parte, la demandante, evacuando el traslado que le fuera conferido, solicitó el rechazo de la excepción en todas sus partes en virtud de los argumentos que consta en el registro de audio respectivo y que se dan por reproducidos para todos los efectos legales.

Que al respecto debe tenerse presente que la ley N° 21.226 estableció un régimen jurídico de excepción para los procesos y plazos judiciales, a raíz de la pandemia por Covid-19.

Que, en este sentido, el artículo 8° de dicho cuerpo legal estableció la prórroga de los plazos de prescripción y caducidad durante el estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, declarado por decreto supremo N° 104, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Al respecto la norma dispone, en lo pertinente, que: *“Asimismo, no aplicará lo dispuesto en el inciso primero de este artículo para el ejercicio de las acciones laborales y de competencia de los juzgados de policía local, en cuyo caso se entenderán prorrogados los plazos de prescripción y de caducidad respectivos, hasta cincuenta días hábiles contados desde la fecha de cese del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, declarado por decreto supremo N° 104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y el tiempo en que este sea prorrogado, si es el caso.*



Que habiendo concluido el referido estado de excepción constitucional, solo con fecha 30 de septiembre de 2021, resulta inconcuso que la demandante accionó dentro del plazo legal, razón por la que se rechazará, sin costas, la excepción en análisis.

SEXTO: En cuanto al fondo

Que con el mérito de la prueba documental incorporada en esta causa, se tendrá por acreditado que la demandante ingresó a prestar servicios para la demandada con fecha 1 de marzo de 2018, desempeñándose como profesora de matemáticas con una jornada de 36 horas semanales, en virtud de un contrato a plazo fijo, cuya vigencia se extendía hasta el día 28 de febrero de 2019.

Que, por anexo de fecha 1 de marzo de 2019, se renovó su contratación hasta el día 28 de febrero de 2020, por 44 horas semanales.

Que en cuanto a la remuneración de la demandante, de las respectivas liquidaciones incorporadas en esta causa consta que esa percibía mensualmente las siguientes prestaciones: B.R.M.N. Educ. Media por la suma de \$648.604.-, B.R.P. Título por la suma de \$70.137.-, B.R.P. Mención por la suma de \$115.469.- y asignaciones de movilización y colación ascendentes la suma de \$9.000.- cada una.

SEPTIMO: Que en cuanto al término de los servicios de la demandante, esta afirma en su libelo que el mes de enero de 2020, llamó al Jefe de la Unidad Técnica pedagógica, Luis Alvarado, quien le informó que trabajaría sólo hasta el 28 de febrero de 2020 ya que figuraba en una lista de profesores que serían despedidos y que recibiría una carta, afirmando que nunca la recibió. Por su parte, la demandada, señala que el término de los servicios de la actora se produjo por vencimiento del plazo convenido en el contrato, habiéndose cumplido con las formalidades legales.

Que el artículo 162 del Código del Trabajo dispone que “Si el contrato de trabajo termina de acuerdo con los números 4, 5 ó 6 del artículo 159, o si el empleador le pusiere término por aplicación de una o más de las causales señaladas en el artículo 160, deberá comunicarlo por escrito al trabajador, personalmente o por carta certificada enviada al domicilio señalado en el contrato, expresando la o las causales invocadas y los hechos en que se funda”.



Que la demandada afirma haber cumplido con todos y cada uno de los requisitos establecidos por la ley para el término del contrato de la demandante, sin embargo, si bien incorporó una carta datada el 27 de diciembre de 2019, en que se alude al término de los servicios por vencimiento del plazo a contar del día 28 de febrero de 2020, no pasa inadvertido para esta sentenciadora que dicha carta no aparece remitida a la demandante en particular.

Que la demandada incorpora también un Comprobante de Carta de Aviso para la Terminación del Contrato de Trabajo presentado ante la Inspección del Trabajo, con fecha 31 de diciembre de 2019, a través de la página web respectiva. En cuanto a la remisión de la carta al domicilio de la trabajadora, si bien incorpora un certificado de Correos de Chile, de fecha 27 de diciembre de 2019, no pasa inadvertido para esta sentenciadora que el mismo da cuenta de la remisión de 16 envíos certificados, sin embargo, no aparece individualizado a quien o quienes fueron remitidos.

Que, no obstante lo señalado precedentemente, debe tenerse presente que el artículo 162 antes citado, en su inciso noveno dispone que *“Los errores u omisiones en que se incurra con ocasión de estas comunicaciones que no tengan relación con la obligación de pago íntegro de las imposiciones previsionales, no invalidarán la terminación del contrato, sin perjuicio de las sanciones administrativas que establece el artículo 506 de este Código.”*

Que, conforme se ha señalado en lo que antecede, en el caso sub lite los litigantes se encontraba en vinculados por un contrato a plazo fijo, esto es, aquel en que las partes establecen al momento de su suscripción la fecha de término del mismo, la que es conocida y aceptada por los contratantes. En este sentido, la propia trabajadora señala en su libelo pretensor que el día 27 de abril interpuso un reclamo ante la Inspección del Trabajo, ocasión en que se obtuvo copia del comprobante de carta de aviso ingresado al portal web de dicha entidad, constatando que su contrato había concluido con fecha 28 de febrero 2020, por la causal contemplada en el artículo 159 N°4 del mismo cuerpo legal, esto es vencimiento del plazo convenido. Lo anterior evidencia que la demandante tuvo conocimiento de la causal de su despido nueve meses antes de impetrar la acción en esta causa.



Que de lo señalado en lo que antecede, resulta inconcuso que el término de los servicios de la trabajadora se produjo por la llegada del plazo que las partes, habían fijado en el anexo suscrito con fecha 1 de marzo de 2019, plazo este que era conocido de la trabajadora y que había sido aceptado por esta al momento de suscribir el anexo señalado.

OCTAVO: Que la demandante solicita se condene a su empleadora a pagarle la indemnización adicional establecida en el artículo 87 de la Ley 19.070, por la suma de \$9.044.560.-

Que el artículo 87 del Estatuto Docente, dispone que *“Si el empleador pusiera término al contrato de trabajo de un profesor por cualquiera de las causales señaladas en el artículo 161 del Código del Trabajo, deberá pagarle además de la indemnización por años de servicios a que se refiere el artículo 163 de ese mismo código, otra adicional equivalente al total de las remuneraciones que habría tenido derecho a percibir si dicho contrato hubiese durado hasta el término del año laboral en curso.”*

Que conforme se ha establecido en lo que antecede, en el caso sub lite, la relación laboral habida entre las partes concluyó por la causal contemplada en el artículo 159 N°4, del Código del Trabajo, esto es, por vencimiento del plazo que las partes habían estipulado en el contrato de trabajo, es decir, por una causal diferente a la consignada en la norma legal antes señalada, por lo que se rechazará la demanda con relación a la pretensión en análisis.

NOVENO: Que en cuanto a la remuneración correspondiente a los meses de enero y febrero de 2020, no habiendo acreditado la parte empleadora el pago de dicha prestación a la demandante, se acogerá la demanda a su respecto.

Que teniéndose presente lo dispuesto en el artículo 19 del DL 3500, la prestación antes señalada deberá cancelarse a la demandante por su monto líquido, para cuyo efecto deberán retenerse y enterarse en las instituciones de seguridad social respectivas, las sumas correspondientes a cotizaciones previsionales y de salud, debiendo determinarse el monto a pagar a la actora en la etapa de cumplimiento de esta sentencia.

DECIMO: Que, asimismo, la demandante solicita se aplique a la demandada la sanción contemplada en los artículos 162 inciso quinto y siguientes del código del trabajo, afirmando que a la fecha del término de los servicios no se



encontraban íntegramente pagadas sus cotizaciones de seguridad social correspondientes a los siguiente periodos: cotizaciones previsionales del mes de febrero de 2020, cotizaciones de salud de los meses de septiembre de 2019 a febrero de 2020 y las cotizaciones del Seguro de Cesantía de los meses de marzo y abril de 2019, septiembre a diciembre de 2019, enero y febrero de 2020.

Que con respecto a los períodos que alega impagos, del mérito del la prueba documental incorporada en esta causa y oficios remitidos por las instituciones previsionales correspondientes, consta que las cotizaciones de AFP Hábitat se encuentran íntegramente pagadas.

Que, de los mismos antecedentes probatorios se observa que se adeudan algunos periodos de cotizaciones de salud y de AFC, sin embargo, debe tenerse presente que el artículo 162 del Código del Trabajo dispone, en su inciso 5°, que para proceder al despido de un trabajador “el empleador le deberá informar por escrito el estado de pago de las cotizaciones previsionales devengadas hasta el último día del mes anterior al del despido...” agregando que “Si el empleador no hubiere efectuado el íntegro de dichas cotizaciones previsionales al momento del despido, éste no producirá el efecto de poner término al contrato de trabajo...”, norma esta, de cuyo tenor literal, se infiere inequívocamente que la misma se refiere a las cotizaciones que deben efectuarse en la AFP.

Que, por lo demás, de la Historia de la Ley 19.631, que establece la sanción en análisis, consta que el Informe de la Comisión de Trabajo consigna que “Ello, sobre todo, afirmaron, incide sustancialmente en el nuevo sistema de pensiones, puesto que éste descansa en las cotizaciones previsionales que, precisamente, deben ser enteradas en la cuenta de capitalización individual del trabajador y que determinan su pensión futura. Del mismo modo, estimaron que el no pago de dichas cotizaciones, en último término, repercute en el Estado pues éste debe hacerse cargo de las jubilaciones de aquellos trabajadores que no reúnen el mínimo de cotizaciones para poder pensionarse, por lo que les parece razonable y de toda justicia que los trabajadores tengan enteradas sus imposiciones previsionales al término de su relación laboral, y si el empleador no ha cumplido con dicha obligación el despido sea considerado nulo.”, lo anterior deja en evidencia que la norma antes citada dice relación con el pago de las cotizaciones de AFP y pretende evitar que los trabajadores presenten lagunas previsionales



que, en definitiva, incidirán negativamente en el monto de sus pensiones futuras, razón por la que no corresponde aplicar la sanción en análisis al caso sub lite ya que nos constan incumplimientos en el pago de la cotizaciones previsionales en la AFP.

Que sin perjuicio de lo razonado precedentemente, se acogerá la demanda en cuanto por ella se pretende el pago de las cotizaciones de salud y de seguro de cesantía que se encuentren impagas durante el período laborado por la demandante, prestación esta que se otorgará en los términos que se señalarán en los resolutivos de esta sentencia.

UNDECIMO: Que la prueba ha sido analizada conforme a las reglas de la sana crítica y los demás antecedentes probatorios, no obstante haber sido debidamente examinados, ponderados y analizados por esta sentenciadora, en nada alteran o modifican la convicción que se ha formado el Tribunal.

Y visto lo dispuesto en los artículos 1, 7, 10, 63, 159, 161, 162, 420, 423, 440 a 462 del Código del Trabajo y Ley 19.070, se declara:

I.- Que **se rechaza**, sin costas, la excepción de caducidad opuesta por la demandada.

II.- Que **se acoge** la demanda solo en cuanto se condena a la demandada **Corporación Educacional Héroes de La Concepción**, representada legalmente por Carlos Eduardo González Julio, a pagar a la demandante la siguiente prestación:

a) \$1.704.420.- por concepto de **remuneración bruta** correspondiente los meses de enero y febrero, ambos de 2020, prestación esta que deberá pagarse a la trabajadora **por su monto líquido**, para cuyo efecto, de la suma antes señalada, deberá **descontarse, retenerse y enterarse** en las instituciones de seguridad social respectivas, los montos correspondientes a cotizaciones previsionales, de salud y de AFC debiendo determinarse la suma a pagar al demandante en la etapa de cumplimiento de esta sentencia.

II.- Que la suma antes señaladas deberán ser pagadas con los reajustes en intereses establecidos en el artículo 63 del Código del Trabajo.

III.- Que, asimismo, se condena a la demandada a pagar las cotizaciones de salud y de AFC de la demandante, que se encontraren impagas durante el periodo laborado entre el 1 de marzo del 2018 y el 28 de febrero de 2020, para



cuyo efecto deberá accionarse en los términos del artículo 4° de la ley 17.322, debiendo calcularse esta prestación en base a la remuneración imponible de la demandante.

IV.- Que se rechaza la demanda en lo demás solicitado.

V.- Que no se condena en costas a la parte demandada por no haber sido totalmente vencida.

VII.- Ejecutoriada esta sentencia cúmplase con lo dispuesto en ella dentro de quinto día y, en caso contrario, certifíquese dicha circunstancia para los efectos del artículo 466 del Código del Trabajo.

VIII.- Asimismo, ejecutoriada esta sentencia devuélvanse los documentos incorporados por las partes y que se encuentren en custodia del Tribunal.

Regístrese, notifíquese a las partes por correo electrónico y archívense los antecedentes en su oportunidad.

RIT O-58-2021
RUC 21- 4-0317019-1

**PRONUNCIADA POR PATRICIA AGUERO GAETE, JUEZ TITULAR DEL
JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SAN MIGUEL.**

